

MILES DE PERSONAS, LA MAYORÍA DE ELLAS POBRES, MURIERON A CAUSA DE UN ESCAPE MASIVO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS TÓXICAS EN BHOPAL EN 1984. CIENTOS DE MILES MÁS CONTRAJERON ENFERMEDADES Y SU SITUACIÓN DE POBREZA SE AGRAVÓ DEBIDO A LA EXPOSICIÓN A LOS GASES. UN CUARTO DE SIGLO DESPUÉS, LA COMUNIDAD SIGUE ARRASADA Y CONTINÚA MOVILIZÁNDOSE PARA LOGRAR JUSTICIA. EL DESASTRE Y SUS CONSECUENCIAS PLANTEAN INTERROGANTES FUNDAMENTALES SOBRE LA RESPONSABILIDAD Y LA ÉTICA DE LOS GIGANTES EMPRESARIALES DEL MUNDO.

EL DESASTRE

Poco antes de la medianoche del 2 de diciembre de 1984, miles de toneladas de gases tóxicos fueron liberadas a la atmósfera en Bhopal, en el centro de India, debido a un escape en la fábrica de pesticidas de Union Carbide. El escape afectó a alrededor de medio millón de personas. Entre 7.000 y 10.000 murieron en los días inmediatamente posteriores y otras 15.000 a lo largo de los 20 años siguientes. Casi 25 años después, no se ha limpiado el emplazamiento de la fábrica, no se han investigado debidamente el escape y su impacto, más de 100.000 personas siguen sufriendo problemas de salud sin recibir la atención médica que necesitan y los sobrevivientes continúan esperando una indemnización justa y un resarcimiento completo por su sufrimiento.

POBREZA AGRAVADA

La mayoría de las personas afectadas por el escape de gas eran pobres. Muchas de las que murieron eran el único o el principal sostén económico de su familia. Algunas familias perdieron también sus animales, una fuente fundamental de ingresos. Miles de personas perdieron su empleo o su capacidad para ganarse la vida debido a problemas de salud. Prácticamente todos los afectados por el escape se vieron arrastrados a una mayor pobreza.

Cuatro años después del desastre, Union Carbide y el gobierno de India alcanzaron un acuerdo extrajudicial por valor de 470 millones de dólares. El Tribunal Supremo confirmó el acuerdo a pesar de que las víctimas, grupos de la sociedad civil y otras entidades lo cuestionaron por insuficiente. Incluso entonces, los sobrevivientes que intentaban conseguir una indemnización tuvieron que afrontar numerosos problemas, incluidos la corrupción, los prolongados retrasos y la denegación de mecanismos de apelación apropiados. La imposibilidad de obtener una indemnización adecuada y puntual sigue afectando a la capacidad de las personas para recuperarse de la tragedia.

El estigma social de estar afectado por el gas ha tenido graves repercusiones, sobre todo para las mujeres. Muchas estaban demasiado enfermas para trabajar y eran percibidas como una carga. Para las que no estaban casadas, la etiqueta de "afectadas por el gas" imposibilitó el matrimonio.

Aunque las autoridades trataron de proporcionar servicios médicos, apoyo para nuevas empresas, formación profesional y nuevas viviendas, estos planes no han representado una auténtica rehabilitación. Muchas personas han tenido que pagar un tratamiento médico supuestamente gratuito. Los locales para empresas industriales siguen vacíos y los centros de formación para mujeres

Bhopal no es sólo una tragedia para los derechos humanos que ocurrió el siglo pasado: es una burla para los derechos humanos en la actualidad. La interacción de poderosos intereses empresariales, complejidades legales e inacción y negligencia del gobierno ha resultado ser un enorme obstáculo para que los habitantes de Bhopal obtengan justicia.

han sido clausurados. Las viviendas construidas para las víctimas del escape, especialmente las viudas, carecen de servicios sanitarios básicos.

El desastre de Bhopal conmovió al mundo y suscitó interrogantes fundamentales sobre la responsabilidad de las empresas. Mientras los habitantes de Bhopal luchan para obtener una prestación tan básica como el agua potable, la empresa elude la rendición de cuentas y obstaculiza los esfuerzos de las víctimas para obtener una reparación.

NEGLIGENCIA EMPRESARIAL

Incluso antes del desastre había indicios de fallos graves de Union Carbide en la fábrica de Bhopal. La empresa almacenaba grandes cantidades de una sustancia peligrosa sin contar con mecanismos de seguridad adecuados. En concreto, la empresa no estableció un plan de emergencia integral para advertir a las comunidades de la zona de un escape, a pesar de que tenía un plan de estas características en Estados Unidos. Este doble rasero por parte de las empresas suele representar un riesgo mayor para los derechos humanos de los pobres en los países en desarrollo.

La respuesta de Union Carbide al escape de Bhopal suscitó interrogantes fundamentales sobre la responsabilidad, la rendición de cuentas y la ética de las empresas. Mientras miles de personas morían en Bhopal como consecuencia de la exposición a aproximadamente 54.000 libras [unos 24.500 kg] de isocianato de metilo (MIC) y 26.000 libras [unos 11.800 kg] de productos de reacción, los encargados de la empresa negaban que el MIC fuera tóxico. Hasta la fecha, Union Carbide no ha revelado el nombre de los productos que se filtraron junto con el MIC, obstaculizando los esfuerzos destinados a tratar a las víctimas. Esta conducta contrasta con la respuesta de Union Carbide a un escape de gas producido en Virginia Occidental (Estados Unidos) en 1985, tras el cual publicó una lista detallada de productos de reacción.

Inmediatamente después de la tragedia de Bhopal, Union Carbide facilitó algún apoyo a las operaciones de ayuda humanitaria. Sin embargo, la empresa también trató de limitar su responsabilidad de indemnizar y se marchó de Bhopal sin limpiar adecuadamente el emplazamiento de la fábrica, dejando a las víctimas en medio de la contaminación.

INCUMPLIMIENTOS DEL GOBIERNO

En virtud del derecho internacional, todos los Estados tienen la obligación de garantizar que

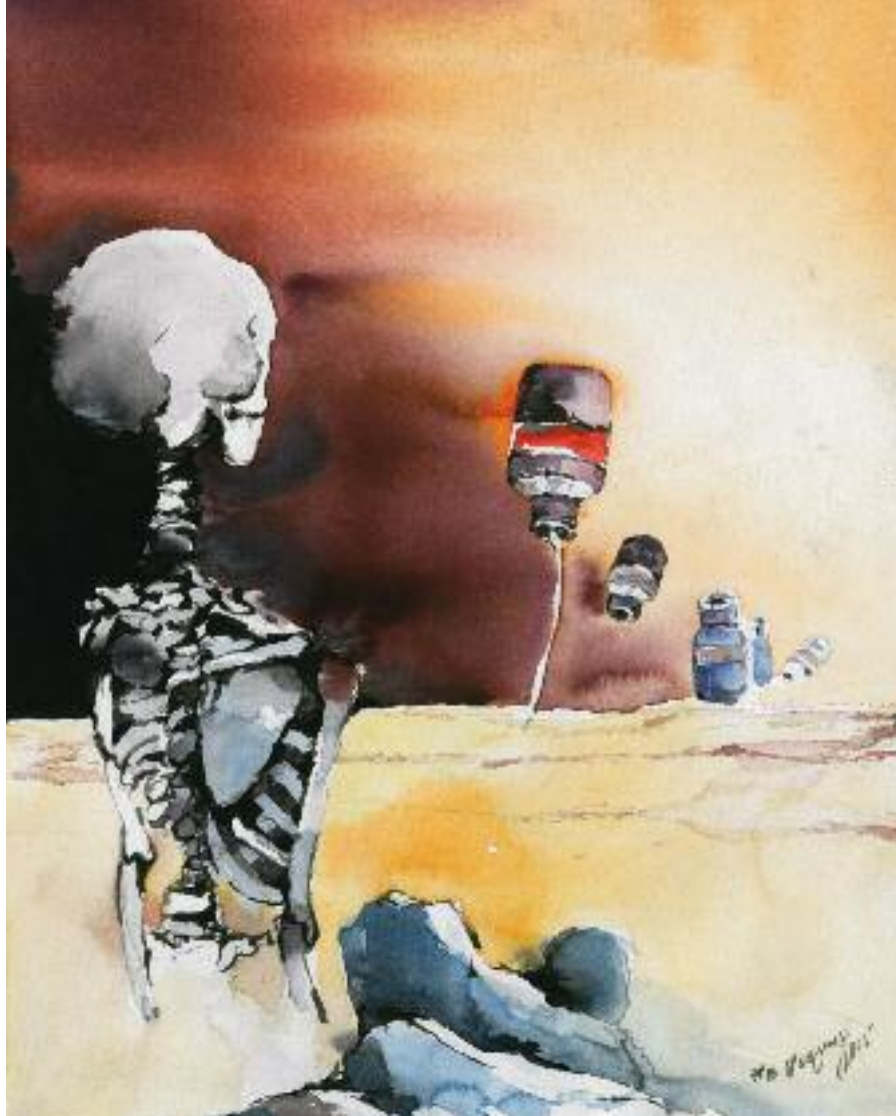


Foto portada: La fábrica de Union Carbide fotografiada en 2002, casi 20 años después del escape de gas.

En esta página: Tinta y acuarela del artista nepalí N.B. Gurung que muestra los efectos que sigue causando el escape de gas de Bhopal.

las empresas no violan los derechos humanos ni actúan en su detrimento. Cuando las actividades de las empresas perjudican los derechos humanos, los gobiernos deben investigar y garantizar que existen y se imponen las sanciones y medidas para la rendición de cuentas adecuadas. El gobierno debe asimismo garantizar el acceso de las víctimas a un remedio efectivo. El gobierno de India no ha respetado ni protegido los derechos humanos de los habitantes de Bhopal en ninguno de estos aspectos.

Pese a las sustancias y procesos peligrosos empleados en la fábrica de Bhopal, no hay indicios de que las autoridades adoptasen las medidas adecuadas para evaluar el riesgo para las comunidades locales o el medio ambiente, o para presionar a Union Carbide a fin de que revisara los mecanismos de seguridad. La actuación del Estado desde que se produjo el escape ha sido inadecuada; la indemnización acordada fue insuficiente, el emplazamiento de la fábrica sigue estando contaminado y el gobierno ha incumplido una y otra vez las promesas que ha hecho a los sobrevivientes y a sus familias.

LAS EMPRESAS IMPLICADAS

En 1984 la fábrica de Bhopal era parte de las operaciones de Union Carbide India Limited (UCIL). Union Carbide Corporation (UCC), empresa radicada en Estados Unidos, era propietaria del 50,9 por ciento de UCIL. UCC viene afirmando sistemáticamente que UCIL era una entidad empresarial totalmente distinta. También ha declarado de forma reiterada ante los tribunales que UCC era una empresa totalmente radicada en Estados Unidos y niega que tuviera “operaciones” en India o en otros lugares fuera de Estados Unidos. Sin embargo, el informe anual de 1984 de UCC afirma: “Las actividades empresariales de Union Carbide Corporation en el mundo se llevan a cabo principalmente a través de las divisiones, subsidiarias y filiales que se enumeran a continuación.” Una de las entidades enumeradas era UCIL, que también estaba incluida en el balance consolidado de UCC para el mismo año.

En 1994 Union Carbide vendió su participación del 50,9 por ciento de UCIL a MacLeod Russel (India) Limited of Calcutta, y la empresa fue rebautizada Eveready Industries India, Limited (Eveready Industries). Union Carbide declaró: “Como consecuencia de la venta de sus acciones en UCIL, Union Carbide no conservó ninguna participación —ni responsabilidad— en el emplazamiento de Bhopal, y Eveready Industries siguió conservando la posesión exclusiva de los terrenos arrendados por el gobierno del estado de Madhya Pradesh.” En 1998 Eveready Industries renunció al emplazamiento de la fábrica de Bhopal, devolviéndolo al gobierno del estado de Madhya Pradesh, aparentemente a petición de éste.

En febrero de 2001, UCC se convirtió en una subsidiaria propiedad en su integridad de The Dow Chemical Company (Dow). Aunque Union Carbide siguió siendo una entidad legal separada, su identidad empresarial y todas sus actividades están plenamente integradas en las de Dow. Dow Chemicals ha declarado públicamente que no tiene responsabilidad alguna sobre el escape y sus consecuencias ni sobre la contaminación causada por la fábrica.

¿A QUIÉN PROTEGE LA LEY?

La tragedia de Bhopal es un crudo ejemplo de cómo la ley protege a las empresas poderosas pero suele fallar a los más pobres. Los numerosos esfuerzos llevados a cabo por los activistas para utilizar la ley a fin de obtener un resarcimiento y conseguir que se rindan cuentas han sido infructuosos.

Veinticinco años después de la tragedia, sigue tramitándose en India un juicio penal. En diciembre de 1991, el primer magistrado judicial de Bhopal ordenó a Warren Anderson, entonces director general de UCC, que compareciera ante el tribunal para afrontar los cargos de homicidio involuntario (no constitutivo de asesinato) en relación con el escape de gas. Anderson no compareció. Los esfuerzos para extraditarlo de Estados Unidos han sido en vano.



BHOPAL LUCHA POR LA JUSTICIA

Los sobrevivientes de Bhopal llevan 25 años luchando por la justicia. Su infatigable campaña para conseguir una limpieza adecuada, indemnizaciones y rendición de cuentas ha llevado a sobrevivientes y grupos de apoyo, niños y personas con discapacidades incluidos, a recorrer varias veces los 800 kilómetros que separan Bhopal de Nueva Delhi. Los activistas han organizado concentraciones, peticiones y huelgas de hambre.

Un litigio de interés público iniciado en 2004 en el que se pedía la limpieza del emplazamiento y otras medidas de rehabilitación sigue en trámite ante el Tribunal Superior de Madhya Pradesh. Aunque el Tribunal Superior ordenó al gobierno que limpiara el emplazamiento, éste no lo ha hecho y los argumentos legales sobre la responsabilidad civil se alargan en los tribunales.

Los esfuerzos de las víctimas para obtener un resarcimiento a través del sistema judicial estadounidense también han sido infructuosos. El equipo jurídico de Union Carbide alegó primero que los tribunales indios eran un foro más adecuado para el caso. La corte federal de primera instancia estadounidense confirmó la petición de remitir el caso de Bhopal a los tribunales indios, con la condición de que Union

Marcha de sobrevivientes de Bhopal y simpatizantes a Nueva Delhi, 2006.

Carbide se sometiera a la jurisdicción de dichos tribunales. Union Carbide recurrió contra dicha condición. En un cambio radical de postura, la empresa alegó entonces ante el tribunal de apelación que: "Los tribunales indios, aunque proporcionan un foro adecuado, no observan las normas del debido proceso que se exigirían como algo normal en este país."

El desastre de Bhopal pone de relieve cómo las empresas pueden utilizar la ley para proteger sus intereses, y cómo la ley perjudica significativamente a las víctimas de esas empresas, sobre todo cuando se trata de empresas transnacionales. Las leyes y los sistemas que protegen los derechos humanos deben evolucionar para abordar con mayor efectividad las realidades de una economía globalizada en la que poderosos agentes transnacionales operan más allá de las fronteras de los Estados.

Amnistía Internacional apoya la campaña por la justicia en Bhopal y sus miembros seguirán uniéndose a sobrevivientes y activistas para exigir justicia, rendición de cuentas y el fin de 25 años de violaciones de derechos humanos.

ACTÚA YA

Amnistía Internacional pide:

- El pleno establecimiento de la prometida Comisión de Empoderamiento sobre Bhopal por el gobierno de India, con recursos y capacidad adecuados.
- Medidas adecuadas para abordar los impactos a largo plazo del escape de gas de Bhopal, que incluyen la limpieza adecuada y la reparación del emplazamiento de la fábrica, así como atención médica, suministro regular y adecuado de agua potable para las comunidades afectadas y rehabilitación económica.
- Actuaciones urgentes y contundentes del gobierno de India para abordar los problemas no resueltos de la indemnización y la rendición de cuentas.
- La adopción por parte de todos los Estados de marcos jurídicos y normativos más sólidos en los ámbitos nacional e internacional para que las empresas rindan cuentas de los abusos que cometen contra los derechos humanos.

DEMANDDIGNITY.AMNESTY.ORG

UN MEDIO AMBIENTE SALUDABLE
ES UN DERECHO HUMANO

AMNISTÍA
INTERNACIONAL



Amnistía Internacional es un movimiento mundial, formado por 2,2 millones de personas de más de 150 países y territorios, que hacen campaña para acabar con los abusos graves contra los derechos humanos.

Nuestra visión es la de un mundo en el que todas las personas disfrutan de todos los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otras normas internacionales de derechos humanos.

Somos independientes de todo gobierno, ideología política, interés económico y credo religioso. Nuestro trabajo se financia en gran medida con las contribuciones de nuestra membresía y con donativos.

Mayo de 2009

Índice: ASA 20/002/2009

Amnistía Internacional
Secretariado Internacional
Peter Benenson House, 1 Easton Street
London WC1X 0DW, Reino Unido

Edición en español a cargo de:
EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EADI)
Valderribas, 13. 28007 Madrid. España

www.amnesty.org